

Los retos de la Educación

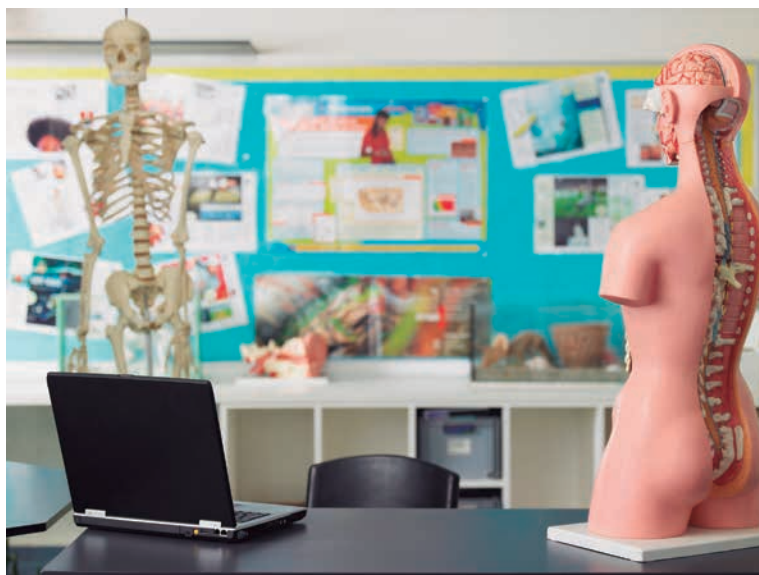
Para entender los actuales retos de la educación hay que empezar reconociendo el importante esfuerzo hecho por la sociedad española. En los inicios de la Transición Democrática nuestro histórico retraso educativo no soportaba la comparación con otros países europeos: mientras en Finlandia, el país con mejores resultados educativos, había sólo un 5% de analfabetos en el año 1900, en la España de 1978 uno de cada cuatro españoles mayor de 16 años era analfabeto o no tenía estudios primarios. Mientras el gasto en educación de Francia en 1978 era el 5,9% del PIB y en Alemania el 4,9%, en España era el 3,0%. Treinta años después estos datos contrastan con una inversión del 5,02% del PIB en 2010 o con una tasa de universitarios del 42%, 12 puntos más que Alemania y una de las más elevadas de toda la Unión Europea.

Esta progresión, reconocida por la OCDE como la más alta tras Corea y con niveles de equidad sólo superados por Finlandia, nos ha colocado en la media de los países de nuestro entorno y, aunque no nos garantiza el futuro porque debemos afrontar aún serios desafíos, nos da una visión muy alejada del diagnóstico sesgado que ha hecho circular el Gobierno del PP para justificar sus recortes y su reforma educativa.

Haber crecido más deprisa y en la mitad de tiempo que nuestros vecinos debería ser motivo de satisfacción, pero también de acicate para preguntarnos si algunas de las decisiones tomadas a finales de los años setenta pueden servirnos de guía para problemas actuales. La respuesta podría estar en el artículo 27 de la Constitución; este precepto encarna mejor que ningún otro el espíritu del pacto constitucional y la voluntad de consenso que en materia educativa se plasmó al situar al mismo nivel el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Si el artículo 27 reconciliaba posturas muy encontradas al inicio de la democracia, hoy necesitamos unos acuerdos básicos que permitan estabilidad legislativa para no someter

al sistema educativo a constantes vaivenes y para ello no partimos de cero; la propuesta del ministro Ángel Gabilondo puede servir de guía, pues sólo la proximidad de las elecciones generales impidió entonces la firma de un acuerdo social y político que en lo sustancial estaba ya cerrado.

Pero el citado equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza puede que sea el mayor reto que tenga en estos momentos nuestra educación ante el ataque a la educación pública en esta última legislatura. La cesión de suelo público



dotacional a centros concertados, los conciertos a la demanda, la especialización curricular, los *rankings*, la ampliación de duración de los conciertos... y tantos otros aspectos contemplados en la LOMCE han roto la simetría de la ecuación constitucional. El deterioro se incrementa con el erróneo tratamiento de la laicidad del Estado, al situar como equivalente una asignatura confesional con otra de fundamento cívico, y se remata con duras medidas de orden presupuestario: eliminación de ayudas para libros, comedores y transporte; recorte a la compensatoria; desaparición de la partida para educación especial, etc. Sólo hay algo peor: el compromiso del Gobierno con la Unión Europea en la última actualización del Programa de

Estabilidad de recortar el gasto en educación hasta el 3,9% del PIB en 2017, lo que descapitaliza nuestro sistema educativo y lo retrotrae a la situación de finales de la década de los setenta. Los efectos de estas políticas de menoscabo de la educación como servicio público son letales para la escuela inclusiva: se niegan segundas oportunidades a los hijos de las familias más vulnerables; se provoca desigualdad educativa, una de las formas más crueles de exclusión social, porque en 2015 el derecho a la educación no significa derecho a un puesto escolar, sino garantía de igualdad de oportunidades de aprendizaje; y se favorece el tránsito del concepto de ciudadano como titular de derechos (entre ellos a la educación) al de consumidor de un producto que entiende la educación como una simple mercancía.

No tendremos buena educación sin buenos profesores y conseguirlo no es un reto menor porque requiere una profunda revisión del perfil profesional del actual docente como aconseja la propia Comisión Europea. En esta coyuntura, la formación del formador adquiere gran importancia tanto en su vertiente inicial como permanente, pues si, como dicen los expertos, el conocimiento de base disciplinaria se duplica cada cinco años, el desfase entre lo aprendido y lo enseñado se puede hacer muy notorio. Acertar con una adecuada formación práctica, con un sistema que seleccione a los mejores y con un diseño de carrera docente son otros tantos desafíos que urge resolver. Estas necesidades objetivas no deben hacer olvidar las duras condiciones en las que ha vivido el sector estos últimos años, al sufrir las políticas de austeridad (incremento de ratios, pérdida de 24.000 puestos de trabajo, etc.) y convertirse en blanco de las descalificaciones del Gobierno por su posición frente a la LOMCE.

La educación es un árbol cuyos frutos tardan en crecer; de ahí la necesidad de pensar cuidadosamente los cambios de política y, por lo mismo, de mantener el impulso cuando resultan claramente beneficiosos. En este sentido, dos de los retos sectoriales más importantes para el futuro de nuestra educación son la educación infantil y la Formación Profesional. La primera es la auténtica vacuna contra el abandono escolar y ha cosechado buenos frutos en su etapa de tres a seis años hasta hacerse universal y gratuita; este éxito pide adelantar aun más el inicio de la escolarización, pese a la decisión contraria del Ministerio de no con-

siderarla etapa educativa y desaprovechar de paso su potencial como yacimiento de empleo; además, los datos científicos avalan que las intervenciones educativas tempranas son el mejor modo de compensar los déficits socioeconómicos y culturales de origen. Otro tanto cabe decir de la apuesta por la Formación Profesional, en este caso aplicada a la mejora de la empleabilidad, de la productividad de las empresas y como factor clave para desarrollar el nuevo modelo productivo.

Las políticas educativas del PP están favoreciendo el tránsito de la noción de ciudadano como titular de derechos (entre ellos, a la Educación), al de consumidor de un producto que entiende la Educación como una simple mercancía.

Por último, podíamos hablar de la "cuestión universitaria", término acuñado en el pasado para resaltar un período de especial conflictividad en nuestra enseñanza superior. Los duros recortes del Gobierno del PP han puesto en peligro el funcionamiento básico de los servicios universitarios al jibarizar el gasto hasta la mitad de la media de la Unión Europea y reducir las plantillas en 6.000 profesores y 2.500 PAS. Resultaría milagroso aparecer entre el centenar de universidades más prestigiosas del mundo cuando el gasto medio por alumno ha caído hasta 6.500€, frente a los 150.000€ de Yale o Princeton; 50.000€ de Oxford o Cambridge; o 20.000€ de Heidelberg. Además, se ha llevado a cabo el hecho insólito de elevar los precios públicos y bajar las becas, deslizando a nuestra Universidad por la peligrosa pendiente del elitismo. El resultado es un profesorado envejecido o poco motivado, al ver frustradas sus expectativas de promoción tras acreditarse y no dotarse plazas; un alumnado con alto grado de decepción que busca el exilio laboral como única salida; y unos grupos de investigación que cada vez reciben más ofertas para trasladar sus proyectos fuera de nuestras fronteras y del sistema que los formó. En resumen, graves problemas de suficiencia, eficiencia y equidad que impedirán hacer de nuestra Universidad una institución que contribuya a garantizar el bienestar social y el crecimiento económico. **TEMAS**